



• LA TRIBUNA DEL DOMINGO

¿Tiene Europa quien la defiende?

ESTE año no se celebran elecciones al Parlamento Europeo; estamos, de hecho, a mitad de legislatura y las próximas no tendrán lugar hasta junio de 2019. Y, sin embargo, la Unión Europea ha afrontado este 2017 con la vista puesta en un agobiante calendario electoral del que parece depender su futuro: Holanda, el pasado miércoles; Francia, con la doble vuelta de las presidenciales en abril y mayo, y por último Alemania, ya en otoño. Algo paradójico, si tenemos en cuenta que las campañas electorales previas a las “europeas”, al margen de no concitar demasiada atención, suelen estar dominadas en cada país por el debate político interno y los asuntos estrictamente nacionales. El mundo al revés.

La explicación es sencilla, al tiempo que preocupante: el proyecto europeo se encuentra, quizá por primera vez en su historia, seriamente amenazado y cada convocatoria a las urnas en uno de los Estados miembros de la Unión ofrece una nueva oportunidad para el avance de aquellas fuerzas políticas que, aprovechando el descontento popular por infinidad de cuestiones, han convertido a la UE en el centro de sus diatribas. De nada sirve lamentarse de que muchos de los argumentos que emplean para ello no resistan un análisis riguroso o incurran directamente en la falacia, si un buen número de ciudadanos está dispuesto a “comprarlos”.

De hecho, si la estrategia funcionó en el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido, ¿por qué no habría de hacerlo en otros lugares una vez que los británicos rompieron el tabú? Incluso los mensajes que en estos últimos meses llegan desde la otra orilla del Atlántico refuerzan claramente esa percepción.

Con este trasfondo, no puede extrañar el interés con el que se han seguido en toda Europa los resultados de las elecciones al parlamento holandés. En liza, y con ciertas opciones de triunfo al menos durante buena parte de la campaña, se encontraba una de esas fuerzas políticas, el Partido por la Libertad de Geert Wilders. Finalmente, el respaldo que ha obtenido apenas ha alcanzado el 13% de los votos, que le sirve en todo caso, y tras un notable crecimiento, para situarse como la segunda fuerza parlamentaria. Aun así, tanto en las instituciones europeas como en las principales capitales nacionales se ha respirado con alivio.

En realidad, el riesgo de que, incluso ganando, Geert Wilders pudiera haber llegado a formar gobierno era muy limitado dada la fragmentación del espectro político holandés y la consiguiente necesidad de gobernar en coalición. También para el caso de las presidenciales francesas suele esgrimirse el argumento “tranquilizador” de que, aun en el supuesto de que la candidata del Frente Nacional fuese la más votada en primera vuelta, tendría pocas opciones de alcanzar en la segunda la Presidencia de la República con independencia de quién fuese su contendiente, como ya ocurrió en 2002 cuando el electorado francés cerró filas en torno a Jacques Chirac frente a Jean-Marie Le Pen.



Geert Wilders, líder del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, de Holanda. | EFE



Marine Le Pen, presidenta del ultraderechista Frente Nacional, de Francia. | EFE

Sería ingenuo, sin embargo, pensar que con ello habríamos salvado la situación y que los problemas que parecen comprometer el futuro de la UE podrían comenzar a reconducirse por sí solos aprovechando, entre otras cosas, una eventual recuperación económica.

La crisis que vivimos no es una más entre las muchas por las que ha atravesado la integración europea a lo largo de su más de medio siglo de existencia. Lo que está en juego no es, como en otras ocasiones, si seguimos avanzando a un ritmo u otro, si es conveniente aparcar temporalmente determinadas iniciativas o tolerar un cierto esta n a c i e n t o transitorio para volver a coger impulso, sino la pervivencia misma del proyecto europeo tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Algo que no había ocurrido antes, como tampoco nunca antes un Estado miembro había decidido abandonar la Unión.

La verdad es que la UE se encuentra en el centro de una especie de tormenta perfecta de la que resulta difícil salir, por más que muchos de los males que se le atribuyen no tengan demasiado fundamento o, cuando menos, no sean sólo fruto de su presunta inoperancia sino de la conjunción de factores, internos y externos, muy variados. Pero el relato ha calado en amplios sectores de la opinión pública y se expande con fluidez sin que nadie parezca tener capacidad o voluntad para atajarlo se-

riamente.

No olvidemos que las instituciones europeas, y en particular la Comisión, son el chivo expiatorio perfecto. Con independencia de que, como es lógico, cometan errores que deben ser criticados, se les puede achacar la responsabilidad, por acción o por omisión – el célebre, ¿dónde está Europa?, de prácticamente cualquier problema grave sin temor a que respondan en términos demasiado contundentes o que puedan hacer mella política en el interior de los Estados. Mucho menos aún en vísperas de una consulta electoral nacional del tipo que sea, frente a la que las instituciones de la Unión deben guardar una exquisita neutralidad. A toro pasado, no son pocos los que han lamentado que durante la campaña previa al referéndum del Brexit no se rebatiesen desde Bruselas algunas de las falsedades más groseras que fueron sistemáticamente utilizadas para rechazar la permanencia. Quienes recurrieron a ellas han reconocido después que no se correspondían con la realidad, pero cuando ya era demasiado tarde porque el pueblo había hablado y su voluntad debía ser respetada. Por otro lado, las propias instituciones siempre han tenido dificultades objetivas para hacer llegar con nitidez su mensaje a la ciudadanía de veintiocho Estados miembros distintos.

Y, ¿qué decir en general de los gobiernos de estos últimos? ¿Acaso pueden resultar convincentes y creíbles sus alegatos a favor de Europa, desprovistos normalmente de entusiasmo y que en el mejor de los casos sólo suelen llegar en extremis, cuando las cosas se han puesto ya muy feas? ¿No tienen derecho los ciudadanos, sobre todo los más afectados por la crisis, a pensar que en realidad lo que sus líderes buscan con ello es preservar su propia posición frente a la amenaza que represen-

tan esas otras fuerzas políticas que lo cuestionan todo y ofrecen soluciones aparentemente sencillas de comprender?

Como cualquier otro sistema político complejo, y el de la UE lo es y mucho, su correcto funcionamiento requiere un compromiso básico de lealtad entre sus distintos componentes. Sin esta lealtad de los Estados hacia el proyecto europeo, que ellos mismos crearon y en el fondo siguen controlando, no hay nada que hacer. Y ello pasa, entre otras muchas actitudes, por hablar claro a los ciudadanos sobre el reparto de responsabilidades entre unos y otros, no escabulléndose por ejemplo detrás de la Unión cuando vienen mal dadas con tal de salvar la cara en el corto plazo

“La Unión Europea debe demostrarnos el valor añadido que está en condiciones de aportar para mejorar nuestro bienestar y de contribuir a la solución de los desafíos más graves a los que nos enfrentamos”

frente al electorado nacional, y aun a riesgo de estar causando así un grave perjuicio a la credibilidad del proyecto común. Algo que, sin ir más lejos, está ocurriendo en un tema tan sensible y dramático como la crisis de los refugiados.

En fin, dentro de unos días, el 25 de marzo, conmemoramos el sexagésimo aniversario de los Tratados de Roma, mediante los que se completó el diseño original de las entonces Comunidades Europeas. Los jefes de Estado y de gobierno de los Veintiocho se reunirán con toda solemnidad en la capital italiana y aprobarán una de esas declaraciones históricas confirmando su compromiso con la integración europea. Será, sin duda, un buen momento para repasar lo conseguido durante los últimos sesenta años y valorar seriamente si merece la pena defenderlo o, si por el contrario, son logros de los que estamos dispuestos a prescindir con cierta facilidad. No quiero decir con ello, ni mucho menos, que la bondad del proyecto europeo deba seguir justificándose bien entrado ya el siglo XXI exclusivamente a la luz de los éxitos del pasado. La Unión debe ser útil aquí y ahora, demostrando el valor añadido que está en condiciones de aportar a fin de mejorar nuestro bienestar y de contribuir a la gestión de los desafíos más graves a los que nos enfrentamos en un mundo en profunda transformación; de otro modo, no tendría sentido en los tiempos que corren. Ahora bien, tampoco conviene perder de vista aquello a lo que renunciaríamos, y que en su día no cayó del cielo, si desandásemos el camino recorrido durante décadas con tanto esfuerzo.

A cada cual corresponde juzgar, puesto que somos los ciudadanos los que a fin de cuentas estamos llamados a pronunciarnos sobre si merece o no la pena seguir apostando por el ideal de la unidad europea.

LUIS N. GONZÁLEZ ALONSO *Director del Centro de Documentación Europea Europeo-Direct de la Universidad de Salamanca*